

# Vistazo a un ajuste imposible

**Minervino Ochoa Carballosa**

*Profesor. Universidad de Holguín.*

El fin del capitalismo en Cuba tuvo causas múltiples, entrelazadas, y con una duración mayor de la que generalmente se estima. Por ello, su desaparición se ha explicado desde diversas aristas. Sin embargo, el recrudescimiento del problema por las contradicciones internas de la reacción, predominante durante el siglo XX, se ha tratado poco. Buena parte de esas discordancias se evidenciaron con la política económica aplicada entre 1952 y 1958. Entre los estudiosos de este tema predominan los economistas y, menos, los historiadores. Todos ellos, sin embargo, sistematizaron los objetivos, los mecanismos empleados y sus consecuencias.

Cuando fue estudiada, la contradicción revolución-reacción signaba la vida del cubano. Los teóricos reaccionarios loaban al capitalismo criollo. Ensalzaban indicadores de coyunturas alcistas, trocándolos en soportes de la bonanza del sistema; generalizaban los que favorecieron algunos sectores sociales, y negaban la existencia de condiciones para una revolución. Según ellos,

la insurrección de 1953-1958 surgió por voluntad de un líder, quien arrastró a las masas, en virtud de su carisma.<sup>1</sup>

Estos asertos encontraron respuesta en el campo revolucionario. Pero los objetivos investigativos se centraron en la polémica política. Por ejemplo, una intervención de la oligarquía proimperialista, paradójicamente, era valorada por los beneficios que pudiera aportar a las masas populares. En raras ocasiones se examinó desde los intereses clasistas del sujeto gestor. Este último enfoque realzaría sus objetivos políticos y revelaría el compromiso de los promotores con el sistema.<sup>2</sup> Hoy es plausible ubicarla dentro de la crisis estructural y sus secuelas —fenómeno de añeja conceptualización<sup>3</sup> y ulterior enriquecimiento—, aquilatar la necesaria reorientación del capital estadounidense, en éxodo desde suelo cubano;<sup>4</sup> abordar el imperioso reajuste del sistema, ya alertado por estudiosos de los Estados Unidos<sup>5</sup> y reactualizado por marxistas cubanos;<sup>6</sup> no desestimar la predicción de freno a cualquier intento en ese sentido,<sup>7</sup> ni excluir la asunción de objetivos políticos.<sup>8</sup>

El concepto de *crisis estructural* es atribuido a Julián Alienes. Con una paráfrasis a Malthus, expuso la *crisis*

---

Mención en el Premio *Temas* de Ensayo 2004, en la modalidad de Ciencias sociales.

como la contradicción entre la tendencia pujante en el incremento poblacional, y el lento crecimiento económico. Para este estudio, la crisis expresa la ruptura interna de la armonía reinante hasta ese momento entre elementos que forman una unidad.<sup>9</sup> Si se acepta la *estructura socioeconómica* como el conjunto de relaciones que establecen los seres humanos —relaciones necesarias e independientes de su voluntad— para satisfacer sus necesidades,<sup>10</sup> cabría preguntarse ¿a qué llamaba Alienes estructura?

Su definición era implícita. La relación economía-sociedad fue la médula del despliegue argumental. Partiendo del hombre, incursionó tanto en la relación con el medio natural, como en el proceso que va de la producción al consumo. Los componentes fundamentales, presentes en su planteamiento, son aceptados en este texto; pero las interrelaciones están aquilatadas de manera diferente. Alienes, además, definió la crisis por la expresión fenomenológica de algunos macroindicadores económicos, y desestimó el vínculo con su raíz.

En la estructura socioeconómica cubana actuaban múltiples pares dialécticos, pero existía uno sustancialmente ligado a su diseño y funciones: las relaciones de subordinación neocoloniales, y la reproducción económica que debía garantizarlas dentro de la Isla.<sup>11</sup> Durante una veintena de años ambas se complementaron. Luego surgió el conflicto. El mercado se contrajo, bajaron las utilidades, y la atadura a los intereses estadounidenses no permitía un reajuste.

Al margen de ambos elementos, Alienes evadió el factor político y destacó solo el económico. En un reconocimiento implícito de la deformación estructural, el reconocido especialista señaló el monocultivo, la monoproducción, la monoexportación y el monomercado como causales del problema. Analizando la *inmovilidad de los factores productivos* presagió la extensión temporal de la crisis. Demostró que la mayor renta sobre la *tierra*, en Cuba, se obtenía en el cultivo cañero. Cuando sobrevenían las coyunturas aciagas, era preferible mantenerla inactiva, que emplearla de otra manera. De igual forma, analizó el *capital*. El azúcar constituía su destino más lucrativo, pero en él las ganancias decrecían ya. Tal certeza desalentaba la disposición a invertir en el territorio nacional. También consideró el origen estructural del desempleo y, entre los elementos de la subutilización de la fuerza de *trabajo*, señaló la estacionalidad de la producción. Incluyó en su análisis la *mercancía*: la cubana, casi solitaria, atada a cuotas en el extranjero y a las veleidades arancelarias de otros países, y las norteamericanas, desplazándola impunemente. Aunque cauto en sus planteos, predijo la permanencia del fenómeno, aun cuando las fases alcistas del ciclo económico proporcionarían circunstanciales respiros.

El sistema se agotaba durante la crisis, lo que favorecía las condiciones para la sustitución revolucionaria. Agotamiento, en este caso, es sinónimo de debilitamiento, no de muerte. Para la conquista del poder, eran imprescindibles factores de movilización y lucha revolucionaria situados más allá de la crisis. Pero ella contribuía a madurarlos. Conscientes o no de la naturaleza del fenómeno, los afectados con poder político emprendieron acciones para resolverlo, o atenuarlo. Entre ellas estuvo la política económica ya aludida. Conviene, entonces, sintetizar sus condicionantes. La exposición se estructura según los factores mediatos e inmediatos y, dentro de ellos, su perfil económico o político.

Desde una perspectiva mediata y política, el dominio foráneo sobre Cuba la insertó en los problemas globales. A partir de 1917, la aparición de un sistema socialista en Rusia despertó el temor a las revoluciones. Peritos de la Foreign Policy Association, tras la conmoción de los años 30, hicieron explícito ese recelo, en 1934. Aunque la miseria extrema constituye un elemento más, y no el único, para un estallido revolucionario, en el marco conceptual donde se movía la reacción ese factor depauperante fue absolutizado. Transcurridos diecisiete años, especialistas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), expresaron reservas similares.

La prosperidad bélica ha creado en Cuba nuevos niveles de vida para muchas gentes, si su economía no puede sostener ese nivel en tiempos menos prósperos —al menos en grado razonable— sobrevendría una gran tirantez política. Si los líderes se han descuidado en prever esta posibilidad, la opinión pública los inculpará. Y si ello ocurriera, el control podría pasar a manos subversivas y engañosas —como ha ocurrido en otros países donde los líderes no se han dado cuenta de las corrientes de estos tiempos.<sup>12</sup>

Es perceptible la preocupación por preservar los «nuevos niveles de vida», clara alusión a las capas medias, potencialmente proletarizables y, en caso contrario, que fuera en «grado razonable». Ambos procesos, por separado o unidos, conducirían a la radicalización. Tales vaticinios advertían al Estado la prioridad de estabilizar el sistema, al precio de limitadas concesiones sociales.

En su vertiente económica, la crisis estructural originó otro proceso. Los monopolios azucareros extranjeros se desprendían de sus fábricas menos rentables y emigraban hacia otros países. Quienes aún operaban dentro de Cuba querían trasladarse hacia sectores no azucareros. Conocían que la cercanía geográfica permitía fletes rentables y hacía competitivas las manufacturas fabricadas en la Isla. Aquel movimiento debía realizarse dentro de «un clima favorable a la inversión», con fuentes crediticias fáciles y baratas, bajo costo de la fuerza de trabajo, magnanimidad del sistema fiscal, etc.

Toca su turno a las incidencias inmediatas y, nuevamente, el factor político las inicia. Batista tomó el

poder mediante un golpe de Estado. La inestabilidad política causada debía paliarse con la búsqueda de sustento social. En tal virtud, fueron directrices, en la concepción de la política económica, las limitadas concesiones a los menos adinerados y la captación de la burguesía no azucarera, sedienta de espacio político y económico. Entretanto, la arista meramente económica se ensombrecía con la superproducción azucarera de 1952 y sus derivaciones.

Conocidos esos cuatro factores, veamos su influencia en la definición de los objetivos de la política económica. Gustavo Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional de Economía (JNE), declaraba: «El gasto público se inspira más en motivos políticos que en razones económicas y sociales, no por capricho, sino obedeciendo a presiones sociales que no pueden desconocerse sin graves peligros».<sup>13</sup> El fin supremo de la política económica buscaba la estabilización del sistema, de lo contrario, peligraban las relaciones de subordinación neocoloniales y la reproducción capitalista cubana.

En el plano teórico, el capitalismo cubano tenía dos opciones fundamentales para reproducirse: una era romper con la subordinación y emprender un rumbo nacionalista burgués que ampliara la estructura. El sujeto social para tal proyecto era la burguesía no azucarera. Sus proyecciones estuvieron condenadas al fracaso. En la práctica, no tuvieron poder económico suficiente para desarrollarlas, ni asumieron el riesgo político de contradecir los intereses de la élite. Históricamente, se les ha considerado la base social del *reformismo burgués*.

La otra opción tenía por marco la propia subordinación neocolonial. También desde el plano teórico, había potencialidades de crecimiento limitado, en ramas donde no se afectasen los intereses del capital foráneo; además, podían favorecerse aquellos monopolios que, por razones de rentabilidad, decidían instalar sus plantas productivas fuera del territorio estadounidense.

El fundamento clasista para esta opción se encontraba dentro del trípede de fuerzas que históricamente había usufructuado el sistema: burguesía azucarera, latifundistas cañeros y burguesía importadora. Sin embargo, solo incluía los componentes menos poderosos que, en condiciones de libre competencia y enfrentados a momentos adversos, podían ser desplazados del mercado. En consecuencia, eran partidarios de una intervención estatal que preservara su supervivencia productiva, mediante un reparto «equitativo» del mercado, los costos, etc. Esa base social incluía a la intelectualidad orgánica.

La actitud de esos componentes será nombrada como *posición oligárquica de reajuste*. En determinados

momentos compartían posiciones con la burguesía no azucarera, para utilizarla como clientela política. Ello formaba parte de su intento de captarla como base social del sistema. Salta a la vista el carácter pro oligárquico de todo este agrupamiento social, aunque tuviese matices diferenciadores con la élite monopolista.

Compuesta por los productores más poderosos, e íntimamente ligada al capital estadounidense, esa élite tenía recursos para afrontar sola las coyunturas adversas, sin que peligraran, en lo inmediato, su continuidad productiva y preponderancia político-social. Además, cuando la borrasca económica ensombrecía el horizonte, generalmente salía favorecida, porque se aceleraba el proceso de concentración y centralización de la producción. Entonces, los fabricantes menos fuertes se veían obligados a cederles su segmento en el mercado. No es extraño que se erigieran en valladar del reajuste, soslayando los propósitos políticos que este perseguía. Para identificarlos, su actitud frente a la política económica es denominada como *posición oligárquica tradicional*.

La existencia de ambas posiciones no significaba un antagonismo profundo dentro del capitalismo cubano. La hegemonía desplegada desde inicios de siglo, bajo el auspicio del capital estadounidense, era mutable; para conservarla se requería constantes renovaciones y adaptaciones. La posición oligárquica tradicional representaba el estadio inicial de predominio del sistema, mientras la de reajuste surgió a instancias de la crisis estructural y daba cuerpo a la perspectiva de su conservación. Eran la etapa inicial y la sustitutiva de un mismo ente económico-social. La calidad evolutiva les daba correspondencia, pero la necesidad, por parte del segundo proyecto, de negar rasgos del primero, condicionó aspectos contradictorios entre ambos.

Como la posición oligárquica tradicional dominaba numerosos escenarios de poder, su resistencia tuvo un alto grado de efectividad. Por la fortaleza de los implicados, el tiempo histórico de duración del duelo se prolongó. La búsqueda de consenso asumió diferentes variantes, entre las cuales estuvo la política económica. Tan dilatada disputa, sin avances apreciables, desgastó al sistema y dio tiempo al surgimiento, organización y cohesión de un nuevo sujeto de cambio; una vez fortalecido, desplegó todo su antagonismo y triunfó, sin que la querrela anterior encontrara solución. A ese dilema, en este trabajo, se le ha llamado *inviabilidad del sistema*.

Sentadas estas bases, abordemos los recursos usados por la posición oligárquica de reajuste para legitimar sus objetivos y actuación. La coacción fue uno, pero será tratada cuando en el análisis aparezcan los momentos esenciales donde la utilizó. No menos tirante fue la búsqueda de un consenso. En ella tuvo un

destacado papel la intelectualidad orgánica. Por su jerarquía de «entendida», manipuló las aspiraciones de quienes quería subordinar. Desplegó un núcleo conceptual importante en la propuesta de objetivos para la política económica. Los artífices fundamentales, Julián Alienes, Gustavo Gutiérrez y Joaquín Martínez Sáenz, calificaron de «anticíclico» al primero. Redujeron la crisis como «el inevitable paso de las condiciones de guerra a las de posguerra». La verdad a medias armaba la imagen de «naturalidad» y «fugacidad» del fenómeno, de manera que la prosperidad esperaba promisoría, y en cualquier momento se presentaría.

A la palabra «crisis» le atribuyeron una connotación pecaminosa; emplearla para calificar la situación del país era obra de «malintencionados» que pretendían «sembrar la desconfianza en el gobierno». A manera de ejemplo, en el discurso con motivo del 4 de septiembre de 1955, año donde la economía tocó fondo, Batista afirmó impávido: «Cuba no está bajo una crisis económica».<sup>14</sup>

Respecto al segundo objetivo la manipulación tomó dimensiones mayores.<sup>15</sup> Los tres economistas mencionados lo enunciaron de diferente manera. Gutiérrez fue ambiguo, solo describió las labores para alcanzarlo, Martínez Sáenz aventuró una transformación estructural de alcance impreciso. Mientras, Alienes ubicó la intervención como un resorte intermedio, que actuaría en momentos depresivos y también en los de auge. Así, extendió su carácter más allá de lo cíclico, según él, para pasar de la inestabilidad a la estabilidad y, mucho más tarde, al desarrollo económico. Ninguno de los tres mencionaba el desarrollo económico y social como algo quimérico y lejano, sino como una meta conquistable tras cierto período preparatorio. El sustantivo ocupó espacios en documentos oficiales y publicaciones y fue incorporado al nombre de instituciones promotoras de la política económica.

Sopesadas esas condiciones, circunscribir el análisis histórico a los objetivos económicos formulados oficialmente corre el riesgo de impregnarlo con la carga distorsionante ya apreciada. Es preferible guiarse por el objetivo global de estabilización del sistema para evitar el estallido social, al cual se subordinaban todos los demás propósitos.

## Despliegue de la política económica

La política económica bebió de dos fuentes, el Informe Truslow y el Programa Nacional de Acción Económica (PNAE), confeccionado a finales de los 40 con la participación de una amplia representación de capas burguesas. En ese sentido, expresó con mayor fuerza las necesidades de reproducción capitalista nacionales.

Cuando en 1952 fue menester operar en la economía, la JNE revisó ambos documentos y elaboró un Programa económico mínimo de acción inmediata, estructurado en diez puntos. En busca de moderación a las hostiles actitudes despertadas con el arribo al poder del nuevo batistato, enfatizó los aspectos de corte social, y excitó las esperanzas de bonanza económica.

Para atenuar la sobresaturación de los mercados en 1952, el gobierno restringió la producción azucarera, nombró un Comité de ventas y segregó 1,75 millones de toneladas que se colocarían, durante el quinquenio venidero, en el mercado norteamericano. Internacionalmente, buscó, con deprimentes resultados, un convenio entre productores para organizar el mercado. Los estudiosos han reseñado la actuación gubernamental en este aspecto y es innecesario seguirla paso a paso. Resulta más provechoso valorarla como parte del reajuste. La premisa para el análisis parte de la siguiente afirmación: las verdaderas intenciones del gobierno no radicaban en la estabilización de los precios; realmente pretendía la conservación del sector.

Aun cuando el éxodo inversionista provocado por la crisis estructural tenía como protagonista al capital estadounidense, importantes grupos oligárquicos de aquel país eran los más interesados en mantener a Cuba en condiciones de producir azúcar. De las compañías norteamericanas, solo dos poseían refinerías ubicadas en territorio isleño, las restantes estaban enclavadas en suelo continental. Esas empresas tenían suficientes motivos para rechazar una política azucarera que promoviese la recuperación de los precios; pero ni remotamente deseaban la desaparición total de la industria que les suministraba su materia prima. Además, el monto del capital norteamericano invertido en el dulce cubano era elevado. Resultaba engorroso encontrar compradores para los centrales, cuando el precio del edulcorante era irrisorio. Entonces sí se recibía con beneplácito la protección, para lograr el funcionamiento de sus fábricas, hasta tanto apareciese una salida más lucrativa.

El grupo Rockefeller predominaba en la economía nacional, tanto en el azúcar como fuera de ella. Mas también ocupaba posiciones cimera en las inversiones dentro de los Estados Unidos y América Latina. Para la época, se vivía una fiebre petrolera, con los Rockefeller al frente de los inversionistas. La combinación de derivados del petróleo y del azúcar ya estaba descubierta como prometedora fuente de ganancias, y aquellos magnates utilizaban sus formidables influencias para materializarla. Desde 1943, existía la Sugar Research Foundation. Su director pronosticaba el uso de esos derivados en amplias ramas de la química, la farmacología, etc. Destacaba, en especial, la necesidad de detergentes no espumosos,

obtenidos a partir del azúcar para «fregar» los pozos petroleros.

Consciente de la magnitud del negocio, la intelectualidad orgánica cubana aprovechó cuanto intervención pública tuvo para reafirmar el peso del sector en la economía nacional y teñir de rosado sus perspectivas. El propio Batista expresó: «Llegará un día en que nos alimentemos con azúcar y nos vistamos con azúcar. El ministro de Agricultura, un poco jocosamente, me decía “qué dulces vamos a estar todos”». <sup>16</sup> Bajo la aparente chanza, latía el papel que desempeñaría Cuba si ese día llegara. En las fábricas criollas continuaría fabricándose crudo, la conversión en productos químicos o de otro tipo se realizaría en plantas estadounidenses; de manera que, si ese día se hubiese materializado, el alimento y el vestuario habría que importarlos. La subordinación neocolonial, desde una arista económica, imponía el mantenimiento del sector azucarero en condiciones operacionales.

La actuación gubernamental tenía una vertiente político-social, que descuidó en ocasiones. 84% de los sembradores cañeros lo componían campesinos pobres o medios, <sup>17</sup> quienes experimentaban tempranamente el descenso de los rendimientos. Ello les pronosticaba su incorporación a las filas asalariadas en épocas poco distantes.

La política económica no contempló fuentes de créditos al sector azucarero y dejó desprotegidos a tan endebles plantadores. La asignación de cuotas para moler, en ningún momento les brindaba posibilidades de desarrollo, solo de pervivencia. Coexistían cosecheros de baja productividad —quienes en condiciones de libre competencia hubiesen desaparecido— junto a explotaciones competitivamente eficientes y rentables, propiedad de campesinos ricos y latifundistas, férreos enemigos de la restricción.

Pero las más candentes contradicciones aliaban a hacendados y colonos contra los asalariados agrícolas e industriales del sector. La disposición de mayor alcance, referente a ellos, resultó la propia restricción. Ella transformaba en menos probable la suspensión de operaciones en algún central; tal posibilidad hubiese acarreado un crítico engrosamiento de los desempleados. Aunque la medida siempre contrajo las opciones de trabajo, los tecnócratas la prefirieron como un mal menor. Sin embargo, los representantes de la posición oligárquica tradicional se movilizaron. Uno de los más elocuentes polemistas resultó el magnate Julio Lobo. Controversialmente, mientras los funcionarios gubernamentales llamaban a la restricción, él predicaba la libre competencia y calificaba de «desacertada» a la política azucarera. Con no poca razón, argüía que la restricción unilateral, históricamente, nunca consiguió la recuperación de los precios. <sup>18</sup> Otro

defensor de las posiciones oligárquicas tradicionales, argumentaba: «El azúcar se entrega cada vez más a la función social. No parece interesar el producir más eficientemente; lo que se procura es que no queden fuera de la producción ni los más incapacitados». <sup>19</sup>

Hay quienes tienden a simplificar estas contradicciones, presentándolas como pugnas por el control de la política económica. En realidad expresaban el dilema estructural. Quizás hayan emanado con tanta fuerza hacia la opinión pública por el peso económico del azúcar, pero también estuvieron latentes en otros renglones.

En medio de una crisis política, la posición del gabinete era más delicada, por las críticas de la élite, para la cual, en el fondo, trabajaba. Aguijoneados por esa ironía histórica, los técnicos convinieron en realizar concesiones. El sobrante azucarero, acumulado en almacenes, debía financiarse. Los críticos catalogaron la operación de riesgosa. Pretendían que se realizase sin intervención estatal. Sus argumentos descansaban en la suficiencia de fondos de la banca privada y en las cajas fuertes de hacendados y grandes colonos. Pero el gobierno, en gesto conciliatorio, autorizó el financiamiento de 120 millones, con la participación del Banco Nacional de Cuba (BNC), principal institución bancaria de la nación.

El Estado prestó un servicio, todavía más importante, a la oligarquía cuando consintió, más de una vez, en rebajar por decreto el salario de los trabajadores azucareros. He ahí una de las encrucijadas donde la esencia oligárquica predominó entre los funcionarios. Si se habían propuesto atenuar la depauperación de las condiciones de vida, la insatisfacción entre los más poderosos los obligó a ceder en un aspecto muy neurálgico, en el sector donde conseguía sus ingresos la mayor cantidad de cubanos. Dicha concesión afectó el objetivo de apaciguamiento popular. Las violentas protestas protagonizadas por el proletariado azucarero durante los años 50, obligaron al gabinete a ceder en el otro sentido: el diferencial azucarero fue pagado.

En general, la restricción impidió un saneamiento del sector, pues continuaron en operaciones las unidades fabriles y los sembradores menos competitivos. Paralelamente, estimuló el éxodo del capital norteamericano desde la industria azucarera. Las nuevas inversiones dentro del sector tuvieron como destino las industrias de subproductos de la caña y el azúcar. En medio de estas realidades, el equilibrio del sistema nunca logró estabilizarse.

La política azucarera fue contractiva. Para compensarla, el efecto expansivo se dirigió a los sectores económicos que no se relacionaban con el azúcar. La expansión crediticia y las exenciones fiscales debían desempeñar ese papel. Ellas fueron aprovechadas para

**En la estructura socioeconómica cubana actuaban múltiples pares dialécticos, pero existía uno sustancialmente ligado a su diseño y funciones: las relaciones de subordinación neocoloniales, y la reproducción económica que debía garantizarlas dentro de la Isla. Durante una veintena de años ambas se complementaron. Luego surgió el conflicto.**

ampliarle la base social al sistema. Una expansión no azucarera, aun con dimensiones discretas, podía ganarle muchos adeptos entre los burgueses no azucareros, pero provocaba, nuevamente, la desaprobación de la élite. Entre las condicionantes de esta posición figuraban:

- Cualquier crecimiento fuera del crudo aumentaría las opciones de labor y, consiguientemente, subiría el nivel de los salarios.
- Las nuevas producciones solicitarían protección arancelaria. En represalia, otras naciones incrementarían sus derechos aduanales al azúcar.
- Las exenciones fiscales no incluían al dulce. Los productores bajaban los costos rebajando el salario. Afectaban así el poder adquisitivo de los consumidores y, como colofón, contraían la demanda de mercaderías transportadas al país por la burguesía importadora.

Para eludir nuevas controversias, la actuación oficial fue cauta. Su intervención, en materia fiscal, estuvo centrada en la rebaja y la exención impositiva. En esa cuerda se movió la Ley de Estimulación Industrial, de 1953. Dentro del bloque de fuerzas burguesas sobre las cuales incidía, surgieron inmediatas posiciones de rechazo. Los importadores no querían favorecer a producciones nacionales sustitutivas de artículos que ellos introducían, y los burgueses no azucareros ya establecidos tampoco deseaban ver cómo se les quebraba su monopolio, con ventajas arancelarias a nuevos competidores.

El gobierno, conservadoramente, condicionó la protección a la conformidad de los industriales que ya actuasen en el giro, y cerró las puertas a quienes no la alcanzasen; así, la burguesía azucarera, enemiga del desarrollo industrial ajeno al crudo, percibió el limitado alcance que tendría, y la aceptó. Aquel acomodo conciliatorio conspiró contra el objetivo de oxigenación para la reproducción capitalista. Quedó al desnudo el límite a la actuación gubernamental impuesto por los más fuertes. Se avanzaba, paulatinamente, hacia el fracaso total del reajuste.

La primacía real, dentro de la práctica fiscal, radicó en la tendencia a facilitar la reorientación de los capitales estadounidenses dentro de la economía cubana. De la gestión estatal, encaminada a ese fin, surgió la Ley de

atracción de inversiones extranjeras. La supuesta inexistencia de suficientes capitales cubanos sirvió de base a las facilidades fiscales brindadas a los inversores foráneos; su endeble argumentación resaltaba, porque la tasa impositiva mundial era muy superior a la cubana,<sup>20</sup> y los inversionistas acudían a los restantes ámbitos del planeta. La unión de ambas pragmáticas solo potenciaba una limitada ampliación de la base económica, y únicamente satisfacía a aquellos burgueses no azucareros que lograron establecerse.

Hacia el interior, el problema fiscal tuvo otra arista. Como consecuencia de la contracción azucarera y de la práctica exencionista, casi siempre se operó con presupuestos deficitarios. Para sufragar otros gastos, originados por la política económica, se recargó de impuestos a todas las actividades. De tal forma, la política fiscal compensó los ajustes redistributivos, con fines sociales. Una vez más, el Estado manifestó en ella su papel de instrumento al servicio de la oligarquía. El peso de las recaudaciones recayó en los sectores más humildes, pues aumentó las imposiciones indirectas y rebajó el tipo impositivo, para hacer crecer el número de contribuyentes.

Los impuestos aduanales constituían una variante muy peculiar dentro del sistema fiscal. A partir de 1955 comenzaron los trabajos para reformarlos. Para 1957, estaba conformada la nueva propuesta. Algunos estudiosos centran su atención en las indiscutibles virtudes técnicas del documento. Visto de esa manera, en él destacan sus intenciones proteccionistas, favorecedoras de la sustitución de importaciones. Mas el problema no radicó en el documento, sino en el contexto donde debía funcionar.

Aquellas pretensiones debían plasmarse en una economía dependiente. Los importadores seguían el proceso con atención, pues temían que, bajo el proteccionismo, surgieran competidores con potencialidades para desplazarlos del mercado interno. Buscaron apoyo en los industriales extranjeros que les suministraban los productos para la importación. En ese contexto, la situación debía resolverse mediante conversaciones gubernamentales bilaterales. Su realización demoró, aún más, la implantación del nuevo arancel. Todavía a mediados de 1958 se desarrollaban

los contactos con funcionarios estadounidenses, y las presiones crecieron. A ese nivel, no funcionaba el criterio de los expertos sobre evitar un estallido social, sino los intereses de los productores norteños, resistidos a ver en peligro un segmento de quienes consumían sus producciones. Los importadores cubanos y la burguesía azucarera —renuente a aceptar condiciones que condujeran a la elevación de los derechos al dulce—, se aliaron a los productores foráneos para conservar su preeminencia comercial.

Ya en 1956, había ocurrido algo similar. En el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (AGAC) parlamentaron delegaciones de ambos países. Las pequeñas ventajas obtenidas por los delegados cubanos tuvieron como desquite la cuota azucarera, tanto en lo referente al arancel, como a la complicación administrativa de tener que elevar el asunto al Congreso de los Estados Unidos, para realizar cualquier cambio. Esa situación conspiró contra el espíritu del reajuste en el orden arancelario. Lo que pudo ser un incentivo a la reproducción capitalista quedó como un montón de pliegos, demostrativos del talento de sus autores, pero de escasa incidencia en la realidad comercial del archipiélago.

Todavía el limitado comercio que se realizaba con otras naciones deparó posiciones desventajosas. En el tratamiento a dichos países imperó el criterio de compensarlos por los saldos negativos que arrojaba su balanza comercial con Cuba. Al querer favorecerlos, el país perdía la ligera acción de contrapeso que ellos significaban, respecto al déficit con el vecino del norte. Como puede apreciarse, ni la reforma fiscal, ni su componente específico de la reforma arancelaria cumplieron los objetivos de la política económica.

Por su parte, la concreción de la política crediticia también afrontó obstáculos. El freno a la depauperación requería de inversiones en la esfera social. El gobierno implementó algunos planes para el mejoramiento de la vivienda campesina, pero a la hora de financiarlos comenzaron las querellas para evadir las cargas fiscales y la magnitud del intento adquirió ribetes simbólicos, más que utilitarios. Un estudio del CNE mostraba, en 1957, que 81,75% de los hogares se encontraba en condiciones higiénicas regulares o malas y 79,9% no presentaba el mejor estado de conservación.<sup>21</sup>

En pos de sus objetivos respecto al empleo, el Estado también incentivó la construcción por cuenta propia. Resultaba carismática, porque cerca de dos terceras partes de las viviendas estaban alquiladas en 1953; claro indicador de su carácter especulativo. Particular connotación adquirió la Ley de alquileres, de 1952. Pretendía descongelar las rentas sobre los inmuebles. Además de los inquilinos, miles de pequeños y grandes comerciantes operaban sus negocios desde

locales arrendados. La ley iba a permitir el aumento de las sumas a pagar por ellos, y rápidamente se movilizaron.

En septiembre de ese año, miles de comerciantes de todo el país desfilaron frente al Palacio Presidencial solicitando el derecho de permanencia, sin alteración de sus alquileres. Ante la magnitud de los afectados, la pragmática solo permitió un aumento de las rentas para los arrendatarios futuros. Quedaron satisfechos los demandantes y se abrió el campo a los inversionistas. Las construcciones inmobiliarias experimentaron un salto y la actividad se concentró en la ciudad de La Habana, donde había menos desplazados por la restricción de la producción azucarera. El intento de abrirles espacio en otras labores rendía pocos frutos, porque estaban situados a decenas de kilómetros de distancia.

En la misma cuerda, desde el propio año 1952 se promovió la construcción de algunas escuelas, hospitales y otras instituciones de mucha falta en la época. La naturaleza de estos afanes no puede conducir a confusiones, ninguna de aquellas obras resolvió el problema de la educación o de la salud. Si el censo de 1953 había arrojado 23,6% de analfabetismo entre la población mayor de diez años, y en zonas rurales se elevaba hasta 41,7%, la encuesta del CNE efectuada en 1956-1957 demostraba que, solo en el campo, había subido a 43,09%.

Cuando en 1955 sesionó el IX Congreso médico nacional, este reconoció el servicio contra la lepra entre los mejor organizados y, a pesar de ello, existía un déficit de 1 450 camas; para la tuberculosis la carencia era superior a las cuatro mil, y en las enfermedades mentales la cifra superaba las quince mil. En total, no menos de 50 000 camas faltantes al país, con mala distribución y ubicación de los hospitales, deterioro de las instalaciones y carencia de medicamentos, entre los problemas más perentorios que los galenos señalaron en el cónclave.

Dentro de la política crediticia hubo cierta tendencia a mejorar la infraestructura para favorecer futuros planes de fomento. A más de vías e instalaciones, fue atendido el estado de las empresas operadoras. Las firmas cubanas mostraban una situación lamentable en cualquiera de sus variantes; fue imprescindible rehabilitar algunas empresas de transporte por ómnibus, los ferrocarriles y la principal aerolínea, donde invertían el presidente y sus familiares. Solo el transporte marítimo continuó en igual situación. En él dominaban las navieras estadounidenses y no admitieron la competencia; fue otra prueba de la inmovilidad del sistema frente a aquellos intereses.

En total, al transporte se dedicaron más de 303 millones de pesos entre 1953 y 1958. Incluyó caminos vecinales, autopistas y sofisticados túneles. Además de

la función infraestructural, estas obras debían atenuar, mediante los jornales, los efectos radicalizadores de la contracción ocupacional del sector azucarero. Pero las interrupciones constantes, por agotamiento de fondos, dejaron inconclusas algunas, y no asumieron la masa de desempleados provenientes del azúcar.

Los bancos de la oligarquía financiera foránea ya habían impuesto su estructura crediticia, discriminadora de la actividad no azucarera. Pero hubo choques en ese aspecto, pues el dinero provino de la compra, obligatoria, de bonos por parte de todas las entidades bancarias operantes en el país. Como puede suponerse, las grandes casas financieras ofrecieron resistencia. El Estado empleó entonces medidas más drásticas y prohibió, a las distintas instancias del gobierno, depositar sus fondos en bancos que no adquiriesen los bonos. Las sumas que se manejaban en la actividad administrativa no eran despreciables, para poder operar con ellas, las casas nacionales accedieron al canje del efectivo por los papeles impresos del ejecutivo. Sin embargo, los banqueros estadounidenses no obedecieron la prerrogativa y durante todo el período no recibieron depósitos estatales. Como se aprecia, los obstáculos al reajuste provenían de todos lados.

Uno de los sectores favorecidos con los préstamos paraestatales, fue el agropecuario no cañero. Gracias a ellos, hubo cierto crecimiento en la producción tabacalera, cafetalera, en frutas y vegetales de estación, y en la arrocería. Las cuatro primeras se orientaban a la exportación y ya tenían mercados.

El arroz se consumía dentro de Cuba y de ahí surgieron las controversias. Los cosecheros norteamericanos tenían una cuota de ventas a nuestro mercado. En 1956, la expansión cubana alcanzó volúmenes que permitían reducir las importaciones. Preocupados, los representantes de los suministradores condicionaron la compra de la cuota azucarera a no disminuir el tonelaje de arroz hasta entonces comprado. Las élites cubanas los apoyaron y, otra vez, la subordinación neocolonial se impuso a la reproducción capitalista criolla.

No obstante, los préstamos al sector continuaron. Procuraban retrasar la proletarización de los campesinos. Los labriegos usaban pocos adelantos técnicos y sus rendimientos decrecían. El patrimonio familiar se reducía y obligaba a los nuevos miembros productivos del núcleo a vender su fuerza de trabajo en algún momento. Los bancos refaccionaban, preferentemente, a la caña. Entonces, el campesinado estaba obligado a pedir pequeños anticipos, en especie, a los comerciantes, para pagarlos con la cosecha. Predominaban los no propietarios que pagaban altas rentas. Un cambio en el sistema de tenencia los beneficiaría. El aspecto era neurálgico y los funcionarios

fueron cautelosos para no dañar a las élites. Una ley de reforma agraria revertiría la situación, y fue creada una comisión para redactarla.

Pudo implementarse una medida conservadora, que no afectase a los titulares ya reconocidos, mediante la entrega de parcelas procedentes de terrenos ociosos, en poder del Estado. Pero tal variante poseía contrasentidos. Los campesinos que pagaban renta abandonarían aquellas parcelas para hacerse de una propia, y muchos jornaleros se transformarían en campesinos. Por consiguiente, disminuiría la oferta de mano de obra y subirían los salarios, para disgusto de los empresarios agropecuarios. Ante la disyuntiva, la comisión nunca pasó de la compilación de medidas similares realizadas en otros países, y las tentativas de reajuste se redujeron a la ampliación del crédito.

Por otro lado, al accionar dentro del sector manufacturero no azucarero le faltó presteza. A causa de los bajos rendimientos, los empresarios eludían invertir en él. La División industrial del Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC) debía incentivarlos, pero ella operaba con los requerimientos bancarios tradicionales. Los escasos proyectos presentados por inversionistas cubanos carecían de sólidos estudios preliminares, y generalmente se rechazaban. Rendido ante las circunstancias, el BANFAIC implementó un Plan de investigaciones tecnológicas y mineras. Con los proyectos materializables, conformó otro Plan de fomento y lo capitalizó totalmente. Tras el montaje, la fase productiva determinaba la privatización o la continuidad como propiedad estatal. Para 1954, había financiado el surgimiento de 39 industrias, que empleaban a 6 868 obreros, pero solo trece superaban el centenar de trabajadores.<sup>22</sup> En un país donde el desempleo englobaba a cientos de miles, el reajuste urgía y el proceso era lento. Se requerían cambios, y surgió el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), institución menos rígida en sus trámites, pues solo requería la aprobación del Ejecutivo. Fue otra concesión gubernamental, porque el aligeramiento burocrático propició la relajación. Pronto comenzaron a salir de sus arcas sumas con dudosos destinos. Facilitar el agio pudo ser un recurso para suavizar las posiciones ante el reajuste.

71,8 % de las industrias surgidas gracias a los créditos del BANDES estaba localizada en la antigua provincia de La Habana, de parca jerarquía azucarera y menos afectada por la depresión económica.<sup>23</sup> De esa manera, el aporte para paliar los resultados depauperantes fue bastante escaso y exacerbó sobremanera las peculiaridades del país. A su vez, entre 1953 y 1958 fueron prestados 198 millones de pesos a inversionistas estadounidenses; los dedicaron a petróleo, minería y manufacturas. La reorientación de sus capitales se realizaba gracias a ese dinero cubano. Unido a las



facilidades fiscales, pudieron extraer del país utilidades por 242 millones.<sup>24</sup> La subordinación neocolonial era palpable, pues el efecto diversificador de las nuevas plantas a duras penas destacaba, pero sus dueños no tuvieron motivos de quejas.

Dentro de los servicios hubo un énfasis muy especial en la rama del turismo. Sus inversionistas no tropezarían con otros intereses foráneos. En 1955 ya existía un Plan de fomento turístico, que multiplicó las capacidades y los ingresos. Sin embargo, el ocio de cubanos fuera del país sobrepasó los aportes de la rama al ingreso nacional.<sup>25</sup> Además, la concentración en La Habana y Varadero aportó escasas plazas a las zonas más azotadas por el desempleo.

En general, todos los centros de producción o servicios, surgidos a instancias de los préstamos oficiales, ahorraron 140,5 millones en divisas, pero las importaciones asociadas para su surgimiento, ascendían a 302,9 millones para 1957.<sup>26</sup> Los más beneficiados con esta parte del reajuste fueron la burguesía importadora y sus suministradores estadounidenses.

La política crediticia permitió una ampliación muy limitada de la estructura. No puede calificársele de diversificadora y, mucho menos, de desarrollista; incluso, las propias contradicciones entre los componentes del sistema redujeron todavía más su alcance potencial. Con ella salieron favorecidos los inversionistas foráneos y un grupo de burgueses cubanos con vínculos en el gobierno, entre ellos, la intelectualidad orgánica.

Por su parte, la política monetaria sopesó las secuelas acarreadas por la contracción productiva azucarera sobre el ingreso nacional, variable muy sensible a las oscilaciones del nivel de vida; su efecto negativo asociado era una reducción de las importaciones, en especial la enorme cantidad de alimentos que entraba por los puertos cada año. Con intenciones estabilizadoras, los peritos económicos decidieron financiarlas con las reservas nacionales de oro y divisas, depositadas en las arcas bancarias, como respaldo de la moneda. Tal decisión era consciente de los riesgos: agotar las reservas y consiguientemente, perdido el respaldo de la moneda nacional, verse obligados a devaluarla.

A su favor obraba el apreciable volumen de reservas monetarias adquirido por el país, a instancias del auge azucarero de la posguerra. Confiados en esa fortaleza, los directivos del BNC giraron con amplitud contra las reservas. En tal virtud, enero de 1959 encontró 79,4% menos de reservas con respecto a 1952. Las estrategias mantuvieron el poder de compra del peso cubano dentro de oscilaciones relativamente estables, pero solo en el orden de los indicadores macroeconómicos, porque la población cubana, poseedora de múltiples matices socioeconómicos,

recibía de manera muy desigual el efecto de esa aparente estabilidad monetaria.

A su vez, la política laboral también respondió a los intereses de la oligarquía. El gobierno se presentó como mediador entre obreros y patronos, pero, en la práctica, apoyaba a los últimos. Su gestión redistributiva del ingreso solo obedecía a mantener en rangos sostenibles el poder adquisitivo de las masas para que consumieron los artículos producidos por los burgueses cubanos o importados desde los Estados Unidos. Aun así, realizó varias rebajas al salario azucarero y solo en 1958 —más por la acuciante situación política nacional que por interés social— se vio precisado a legislar al respecto. Muchos logros fueron arrancados más que concedidos; la batalla más decidida fue librada por los azucareros y estuvo dirigida al cobro del diferencial azucarero. La magnitud de las protestas puso en peligro la realización de las zafras y el gobierno cedió ante las demandas.

La política económica también vio frustrado su propósito respecto al empleo. Cuando en 1956-1957, el cubano humilde era interrogado sobre el factor más conveniente para mejorar su nivel de vida, 73,46 % señalaba el trabajo y un mayoritario 68,73 % indicaba al gobierno como máximo responsable del problema.<sup>27</sup> El salario se mantuvo deprimido y el régimen de seguridad social era poco eficiente.

## Balace

Los estudios sobre la política económica aplicada en el período 1952 a 1958 han reconocido, entre sus efectos nocivos, lo deforme y desigual de la economía, la pérdida de las reservas en divisas, el aumento de la deuda pública externa e interna, el desarrollo del agio, un crecimiento económico por debajo de las manufacturas no azucareras, agricultura no cañera, las construcciones y los servicios públicos, que restaron parte del rigor implícito en la contracción económica al proletariado no azucarero y a los empleados públicos de La Habana y otras regiones muy específicas.

En los niveles gubernamentales hubo una pretensión de estabilización política, no solo por las vías represivas y violentas, sino también por las económicas. Para tales fines, intentó captar a la burguesía no azucarera, abriéndole cierto espacio. Quiso retrasar la proletarianización de los estratos sociales medios urbanos y rurales, aunque ello también significó el retraso del desarrollo capitalista y de las fuerzas productivas, y pretendió atenuar, infructuosamente, el desempleo y la depauperación social como fuentes de radicalización. Facilitó la reorientación del capital estadounidense, de manera que impidiera su evacuación del país a causa de la merma en las ganancias que traía la crisis estructural del sistema.

Estas líneas de actuación tuvieron su complemento económico de enfrentamiento a los problemas que generaba la unión de la crisis estructural y la cíclica, en los esfuerzos por preservar la estructura productiva azucarera y reorientarla a los derivados de la caña y del azúcar; ampliar, de manera limitada, la base estructural de la economía mediante la diversificación y, a su vez, crear el soporte infraestructural para las nuevas inversiones que ese empeño requería.

Aunque esa política económica terminó el 31 de diciembre de 1959, no estaba diseñada para ello; sus estrategias perseguían su continuidad; pero para lograrla era preciso un reajuste en las relaciones neocoloniales imperantes y los máximos usufructuarios de estas se empeñaron en evitarlo. El reajuste prudente de las estructuras, sin sustituirlas, fue el último recurso del capitalismo para lograr su supervivencia, pero los más beneficiados, contradictoriamente, se opusieron a él. Eso demuestra el grado de inmovilidad del sistema para los años 50 y el porqué de no encontrar salvación dentro de sus propios marcos.

## Notas

1. Véase Theodore Draper, *Castro's Revolution: Myths and Reality*, Frederick A. Praeger, Nueva York, 1962; *Castroismo: Theory and practice*, Frederick A. Praeger, Nueva York, 1965.
2. Véase José L. Rodríguez, *Dos ensayos sobre la economía cubana*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984; Carlos Rafael Rodríguez, *Letra con filo*, t. 2, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1983; Gloria García, *La política económica de la dictadura de Batista*, Universidad de La Habana, La Habana, s/f; Raúl Cepero Bonilla, *Escritos históricos*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989; Erasmo Dumpierre, *El BANDES: corrupción y política*, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1970; Enrique Collazo, *Cuba. Banca y crédito. 1950-1958*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989; Julio Le Riverend *et al.*, *Historia de Cuba*, Pueblo y Educación, La Habana, 1978; Ismael Zuaznábar, *La economía cubana en la década del 50*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1986; y Graciela Chailloux *et al.*, *Historia económica de Cuba*, Ediciones ENSPES, La Habana, 1989.
3. Julián Alienes, *Características fundamentales de la economía cubana*, Cenit, La Habana, 1950, p. 20.
4. Oscar Pino Santos, *El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui*, Editorial Orbe, La Habana, 1975, p. 76.
5. Comisión de Asuntos Cubanos, *Problemas de la Nueva Cuba*, Foreign Policy Association, Nueva York, 1935, p. 219; e *Informe de la Misión Truslow sobre Cuba*, Publicaciones de la Junta Nacional de Economía, La Habana, 1951, p. 42.
6. Véase Francisca López Civeira y Enrique Luis Gil Márquez, «Un plan imperialista contra Cuba: el Informe Truslow», en *Historia de las relaciones de EE. UU. con Cuba*, selección de lecturas, Ediciones Ministerio de Educación Superior, La Habana, 1985, pp. 257-87.
7. Jacinto Torras, *Obras Escogidas*, t. 2, Editora Política, La Habana, 1985, p. 283.
8. Carlos Rafael Rodríguez, *ob. cit.*, p. 231.
9. Véase Carlos Marx, *El Capital*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, p. 78.
10. Véase Carlos Marx, *Contribución a la crítica de la economía política*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, pp. 9-10.
11. Se acepta la siguiente definición de reproducción: «Todo proceso social de producción considerado en sus constantes vínculos, y en el flujo interrumpido de su renovación es, al mismo tiempo, un proceso de reproducción». Véase Carlos Marx, *El Capital*, t. 1, *ed. cit.*, p. 512.
12. *Informe de la Misión Truslow...*, *ed. cit.*, p. 42.
13. Véase Junta Nacional de Economía, *Boletín Informativo*, v. III, nn. 11-2, La Habana, noviembre-diciembre de 1954, p. 651.
14. Fulgencio Batista, «Alocución presidencial, 4 de septiembre de 1955», (folleto sin datos editoriales).
15. Véase Programa de Desarrollo Económico y Social, *Informe no. 2*, Banco Nacional de Cuba, La Habana, 1957, p. 2.
16. «XXIX Conferencia Anual de Técnicos Azucareros de Cuba», en Consejo Nacional de Economía, *Boletín Informativo*, v. IV, n. 2, La Habana, noviembre de 1955, p. 406.
17. «Distribución de la producción de caña por cultivadores», *Cuba Económica y Financiera. Anuario Azucarero de Cuba*, La Habana, 1952, p. 149.
18. *Ibidem*, p. 43.
19. Rufo López Fresquet, *El año económico de 1952-53*, Editorial Lex, La Habana, 1953, p. 94.
20. Véase Consejo Nacional de Economía, *Boletín Informativo*, v. V, n. 10, La Habana, octubre de 1955, p. 362.
21. Oscar Echevarría, *La agricultura cubana 1934-1966*, Ediciones Universal, Miami, 1971, p. 34.
22. Consejo Nacional de Economía, *Boletín Oficial*, La Habana, diciembre de 1956, pp. 107-9.
23. Programa de Desarrollo Económico y Social, *Informe no. 3*, Banco Nacional de Cuba, La Habana, p. 12.
24. Ismael Zuaznábar, *ob. cit.*, pp. 51-3.
25. Aparecieron 5 964 nuevas capacidades en moteles y hoteles hasta 1958, en virtud de inversiones por valor de 86,3 millones de dólares y produjeron ingresos por valor de 190,8 millones. Los gastos de los cubanos en el extranjero ascendieron a 197,7 millones de dólares. Véase Programa de Desarrollo Económico y Social, *Informe no. 1*, Banco Nacional de Cuba, La Habana, 1957.
26. *Ídem*.
27. Oscar Echevarría, *ob. cit.*, p. 34.